

### **Una tonelada, 200 euros: La crisis del sector cerealista en Castilla y León**

*Los estándares de calidad, las condiciones climatológicas y la falta de mano de obra, entre los principales problemas a los que se enfrentan los agricultores cerealistas*



*¡Estamos defendiendo tus cervezas!, Esta es la vaciada España de la que habláis tanto en campaña, Sin el campo y la ganadería tu mesa está vacía, Sin el sector agropecuario tu frigorífico servirá de armario.* Estos fueron algunos de los carteles que llenaron las principales cabeceras, telediaris y boletines informativos de los medios de comunicación españoles, ante la primera gran tractorada del año 2024. Esta manifestación comenzó el 6 de febrero, en señal de queja, por parte de un sector agrícola desesperado y ahogado por, entre otros motivos, los bajos precios del cereal; los desiguales estándares de calidad internacionales; las malas cosechas derivadas de las condiciones climatológicas adversas en los últimos años; o la falta de mano de obra en el sector.

Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor producción cerealista en España, debido a su superficie de cultivo -1.637.465 hectáreas-, y la gran oferta anual de cereal que genera dentro y fuera de las fronteras nacionales -3.239.770 toneladas-. A nivel provincial, hay tres provincias castellano leonesas que destacan en cifras frente a las demás, Burgos cuenta con 343.428 hectáreas (ha) cultivadas, de las que en 2023 cosechó 829.205 toneladas (t) de cereal; Palencia tiene 255.703 ha y cosechó 600.400 t; y por último Valladolid que posee 282.422 ha y cosechó 507.975 t, según la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.

Además, en la comunidad prima el cultivo cerealista de trigo, para el que se reservan un total de 761.602 ha, que en costes de producción suponen una inversión de 533.121.400 euros y del que se obtiene 1.638.580 t, lo que se traduce en 414.233.024 euros. Por otra parte, el segundo cereal más cultivado es la cebada, que se cultiva en 703.892 ha, y supone un coste de 492.724.400 euros, de la que se recolectaron en el pasado año 1.339.356 t, que se traducen en 316.355.887 euros de ganancias, según

el Observatorio de precios de los productos agrícolas y ganaderos de la Junta de Castilla y León

Estos datos se entienden con mayor claridad cuando el agricultor y presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores en Castilla y León (Asaja), Donaciano Dujo Caminero, explica: «El cereal está a 200 euros la tonelada y los costes de producción están a 700 euros la hectárea. Esto provoca que la gente no siembre, y es que antes en Castilla y León se sembraban dos millones de hectáreas y este año no vamos a pasar de las 1,5 millones».

Uno de los grandes problemas que afectan a los agricultores cerealistas en España, según Donaciano es «la masiva importación que España está haciendo de cereal ucraniano a muy bajo precio, por ello lo que se pide desde el sector es que se ayude a los ucranianos, pero a un precio que no arruine nuestras exportaciones. Todo lo que venga a menos de 300 euros hay que ponerle arancel, y eso incluye al cereal ucraniano». La invasión de Rusia a Ucrania iniciada el 24 de febrero del año 2022 generó un gran impacto social, político y económico en todo el mundo. Y uno de los sectores más afectados por el conflicto ha sido el agrícola, especialmente el cerealista.

Los profesionales del cereal observaron cómo en cuestión de tres meses los precios de todos los tipos de cereales se dispararon hasta cifras como el de la cebada que pasó de costar en febrero 269 euros la tonelada a 343,3 euros en mayo o el trigo, que en febrero costaba 277,6 euros la tonelada y en mayo aumentó hasta los 360,5 euros, según el Observatorio de precios de los productos agrícolas y ganaderos de la Junta de Castilla y León. Tras estas cifras se esconden una serie de motivos, como el aumento en el precio de algunos de los productos empleados en la producción del cereal, tales como los fertilizantes, de los que Rusia era gran exportador y a los que se impusieron fuertes sanciones, o el combustible y la energía, que se encarecieron por la crisis del petróleo y del gas.

Por otra parte, la reducción de la oferta mundial cerealista obligó a los agricultores españoles a competir y encarecer sus precios por los altos costes de producción, sin embargo, esto no consiguió estabilizar su situación económica debido a los límites impuestos por los gobiernos nacionales o los grandes distribuidores en los precios de los mercados.

Además, relata Donaciano, «dentro del contexto mundial, Europa es la que más estándares de calidad impone. Y tanto el gobierno de España como el de Castilla y León lo retuercen más», porque «nadie en el mundo produce como nosotros y allá donde vamos triunfamos». Sin embargo, «el problema está en que lo que nosotros producimos tiene unos costes muy caros y tenemos que venderlo a unos precios elevados». Este es, tal y como argumenta el presidente de Asaja Castilla y León, otro de los grandes problemas que enfrentan los agricultores cerealistas, los estándares de calidad.

La Comisión Europea establece en un comunicado sobre la política de calidad de los productos agrícolas, normativas relativas a lo medioambiental, al bienestar de los animales, o haber cumplido con el correcto uso de plaguicidas y productos fitosanitarios. A lo que se suma la obligatoriedad de incluir un etiquetado o logotipo que marcara a siempre vista el cumplimiento de los requisitos impuestos por la Unión Europea.

A esto último se suma la normativa europea que regula el sector primario de todos los países, la Política Agraria Común (PAC). Esta sufrió una reforma en el año 2023, con la intención de conseguir nueve objetivos distintos antes de 2027. Estos están incluidos en el portal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:

- En un intento de mejorar la seguridad alimentaria de los productos obtenidos en explotaciones agrícolas europeas, se busca «apoyar una renta viable y la resiliencia» de estas mismas.
- Promover mejoras en el mercado internacional, consiguiendo un espíritu económico europeo más competitivo.
- Variar la cadena de valor europea, de tal manera que mejore la situación de los agricultores.
- Disminuir el impacto del cambio climático y adaptar Europa a las energías sostenibles, gestionando de forma eficiente los recursos naturales existentes.
- Proteger la biodiversidad y los ecosistemas que alberga el territorio europeo.
- Rejuvenecer las zonas rurales, atrayendo a jóvenes agricultores a ellas.
- Generar «empleo, crecimiento, inclusión social y desarrollo local en las zonas rurales».
- Fortalecer la relación de la Unión Europea con la sociedad, generando un tiempo de respuesta menor a las exigencias agrícolas de esta.
- Fomentar un clima de conocimiento y enseñanza mutua entre los profesionales del sector agrícola que tenga como último objetivo la modernización de la agricultura.

Otro de los problemas que, según Donaciano, sufrió el campo cerealista de Castilla y León fue: «La cosecha de 2023 fue catastrófica por la sequía y la del 2022 directamente fue mala en toda la autonomía, con unos costes de producción muy altos». Sin embargo, el presidente de Asaja Castilla y León, destaca las ayudas recibidas por parte del Gobierno y de la Junta. Esta última entregó una serie de ayudas directas que complementaban la indemnización del seguro agrario, además de destinar 63 millones de euros para bonificar los préstamos suscritos por explotaciones agrarias para afrontar las consecuencias de la sequía.

Por último, Donaciano destaca que «los pueblos de Castilla y León están despoblados y envejecidos, y los políticos no hacen más que demagogia con el rejuvenecimiento, cuando deberían poner empeño y presupuesto para hablar claro y dar una solución a las cabeceras de comarca». Y las cifras así lo respaldan, tal y como publica en la

Encuesta de Población Activa del año 2024, la Junta de Castilla y León la variación interanual de la cantidad de población ocupada dedicada al sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en Castilla y León ha sido de un 10,11% menos, lo que se traduce en 6.742 personas que ahora ya no se incluyen laboralmente en el sector primario, y la cifra resultante en el año actual es de 59.937 personas.

Además, resalta Dujo: «Todos los que proponen soluciones están viviendo en la ciudad y quieren que otros vayan a repoblar esos pueblos. El campo de Castilla y León es el principal sector que tiene gran necesidad de mano de obra, pero la gente no quiere ir a vivir a estas zonas rurales, porque si es muy duro vivir en un pueblo pequeño, sin ningún servicio, alejado de la capital para el titular de la explotación, en el caso de tener una familia es imposible, porque ni hay colegio, ni hay servicios, ni hay de nada. Por tanto, no queremos condenar a personas a vivir en condiciones que hoy la sociedad no establece como suficientes».

Asimismo, concluye el presidente de Asaja de Castilla y León: «Cuando no hay alegría económica en una casa, es muy difícil que los hijos quieran mantener la explotación. Y al final, si no hay rentabilidad, no hay viabilidad».